



Asamblea General

Distr. general
30 de junio de 2014
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

27º período de sesiones

Tema 3 de la agenda

**Promoción y protección de todos los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluido el derecho al desarrollo**

Informe anual del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación

Presidenta/Relatora: Patricia Arias

Resumen

En el presente informe se ofrece una visión general de las actividades realizadas por el Grupo de Trabajo durante el período que se examina, con inclusión de sus períodos ordinarios de sesiones, las comunicaciones y las visitas a países.

En la parte temática del presente informe figuran los resultados del estudio que el Grupo de Trabajo está realizando en todo el mundo de las leyes y los reglamentos nacionales relacionados con las empresas militares privadas o las empresas de seguridad privadas (EMSP). En el presente informe, el Grupo de Trabajo centra su atención en la legislación de ocho países francófonos de África (Burkina Faso, Camerún, Côte d'Ivoire, Malí, Marruecos, República Democrática del Congo, Senegal y Túnez) y en la de ocho países de la región de Asia (China, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Malasia, Pakistán, Singapur y Sri Lanka). El estudio mundial del Grupo de Trabajo apunta a evaluar la legislación nacional vigente relativa a esas empresas y si son eficaces para proteger los derechos humanos y promover la rendición de cuentas en caso de transgresiones. Además, apunta a indicar los elementos comunes, las buenas prácticas y las lagunas reguladoras que existan.

El Grupo de Trabajo observa que, si bien la legislación de esos países tiene elementos comunes, los distintos contextos nacionales afectan a la forma en que se regulan las EMSP y el criterio regulador de cada país es considerablemente distinto. El Grupo de Trabajo reitera la necesidad de una regulación efectiva de las actividades de las EMSP e invita a todos los Estados Miembros a facilitar su estudio de la legislación nacional, cuyo

GE.14-06907 (S) 160714 160714



* 1 4 0 6 9 0 7 *

Se ruega reciclar



propósito es determinar las tendencias y buenas prácticas existentes y formular directrices que permitan a los Estados Miembros ejercer una supervisión efectiva de las actividades de las EMSP.

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción	1–3	4
II. Actividades del Grupo de Trabajo	4–12	4
A. Períodos de sesiones 19º, 20º y 21º del Grupo de Trabajo	6–8	4
B. Comunicaciones	9	5
C. Visitas a países	10	5
D. Reunión de información sobre personas condenadas por actividades mercenarias.....	11	6
E. Otras actividades de los miembros del Grupo de Trabajo	12	6
III. Investigación sobre la regulación nacional de las EMSP	13–66	6
A. Introducción.....	13–14	6
B. África francófona.....	15–44	7
C. Asia.....	45–66	15
IV. Conclusión y recomendaciones.....	67–75	22

I. Introducción

1. En el presente informe, el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación describe las actividades que ha llevado a cabo desde que presentó su último informe al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/24/45). En la sección temática del informe se presentan los resultados del estudio mundial del Grupo de Trabajo sobre la legislación nacional de ciertos países de África y Asia relativa a las empresas militares o las empresas de seguridad privadas.

2. El informe se presenta en cumplimiento de la resolución 2005/2 de la ex Comisión de Derechos Humanos, por la que se estableció el mandato del Grupo de Trabajo, y de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 7/21, 15/12 y 24/13, por las que el Consejo prorrogó ese mandato.

3. El Grupo de Trabajo está integrado por cinco expertos independientes: Patricia Arias (Chile), Elzbieta Karska (Polonia), Anton Katz (Sudáfrica), Faiza Patel (Pakistán) y Gabor Rona (Estados Unidos de América). El mandato de la Sra. Patel terminó oficialmente el 2 de junio de 2014. Ese mismo día se designó miembro del Grupo de Trabajo al Sr. Saeed Mokbil (Yemen). En su 20º período ordinario de sesiones, celebrado en diciembre de 2013, el Grupo de Trabajo eligió Presidenta-Relatora a la Sra. Arias para el período comprendido entre enero y diciembre de 2014.

II. Actividades del Grupo de Trabajo

4. De conformidad con su práctica habitual, el Grupo de Trabajo celebró tres períodos ordinarios de sesiones: dos en Ginebra y uno en Nueva York. Celebró reuniones periódicas con representantes de Estados Miembros, organizaciones no gubernamentales y expertos. Examinó denuncias relativas a las actividades de mercenarios y de empresas militares o de seguridad privadas (EMSP) y sus efectos en los derechos humanos y decidió qué medidas correspondía tomar.

5. Para los fines del presente informe, por EMSP se entenderá "la entidad empresarial que preste servicios militares o de seguridad remunerados por medio de personas físicas o jurídicas". Por servicios militares se entenderá "los servicios especializados vinculados con actividades militares como planificación estratégica, inteligencia, investigación, reconocimiento terrestre, marítimo o aéreo, vuelos de todo tipo, tripulados o no tripulados, vigilancia por satélite, cualquier tipo de transferencia de conocimientos con aplicaciones militares, apoyo material y técnico a las fuerzas armadas y otras actividades conexas", mientras que por servicios de seguridad se entenderá "la guardia y protección armadas de edificios, instalaciones, propiedades y personas, cualquier tipo de transferencia de conocimientos con aplicaciones en los ámbitos de la seguridad y la policía, el desarrollo y la aplicación de medidas de seguridad de la información y otras actividades conexas"¹.

A. Períodos de sesiones 19º, 20º y 21º del Grupo de Trabajo

6. El Grupo de Trabajo celebró su 19º período de sesiones en Nueva York del 29 de julio al 2 de agosto de 2013. Como parte de ese período de sesiones, organizó debates de mesa redonda con expertos para examinar la utilización de EMSP por las Naciones Unidas,

¹ Proyecto de una posible convención sobre las empresas militares y de seguridad privadas para su examen y la adopción de medidas por el Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/15/25, anexo I.

en el contexto del estudio que inició en marzo de 2013 y cuyos resultados constituirán la base del informe que ha de presentar a la Asamblea General en su sexagésimo noveno período de sesiones. La primera mesa redonda estuvo dedicada a la utilización de EMSP por las Naciones Unidas en carácter de guardias armados y la segunda a la utilización de esas empresas por las Naciones Unidas en operaciones de paz.

7. El 20º período de sesiones del Grupo de Trabajo tuvo lugar en Ginebra del 16 al 20 diciembre de 2013 y, en su curso, el Grupo de Trabajo celebró consultas con representantes de Estados Miembros sobre las solicitudes pendientes de visitas a países. El 21º período de sesiones tuvo lugar en Ginebra del 3 al 7 de marzo de 2014 y, en él, el Grupo de Trabajo debatió con representantes de la sociedad civil la importancia de un instrumento internacional con fuerza obligatoria para regular las actividades de las EMSP, con inclusión de normas mínimas de regulación, y la estrategia para movilizar a los interesados en apoyo de un instrumento con fuerza jurídica obligatoria para estrechar una colaboración constructiva con Estados, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales. El Grupo de Trabajo seguirá preparando una posible convención internacional sobre las empresas militares y de seguridad privadas.

8. El Grupo de Trabajo organizó el 5 de marzo de 2014 un acto público sobre la cuestión de la utilización por las Naciones Unidas de EMSP, en el que formuló una declaración introductoria la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los participantes examinaron la política y las directrices de las Naciones Unidas sobre la utilización de guardias armados, recientemente aprobadas, y los problemas a que hacían frente las Naciones Unidas al adjudicar diversas tareas de seguridad a contratistas privados. En los debates quedaron de manifiesto los peligros que se planteaban para las operaciones de las Naciones Unidas, su personal y las poblaciones locales. Se insistió en la necesidad de que las Naciones Unidas se cercioraran de que las EMSP y los actos de sus empleados se ajustaran a las normas internacionales. Los participantes hicieron propuestas concretas para hacer frente a algunos de los problemas, como la de establecer un sólido proceso de selección y estudio de antecedentes al utilizar empresas de seguridad privadas y la de cerciorarse de que se establecieran mecanismos para que hubiera recursos en caso de posibles infracciones de los derechos humanos.

B. Comunicaciones

9. Desde que presentó su último informe al Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo ha transmitido seis comunicaciones a los Gobiernos de Australia, los Estados Unidos de América, Honduras, Papua Nueva Guinea y Tanzania². El Grupo de Trabajo expresa su reconocimiento al Gobierno de Honduras, que dio respuesta a una de las comunicaciones que le habían sido enviadas, e invita a los demás gobiernos a hacerlo a la brevedad posible.

C. Visitas a países

10. En el período que se examina, el Grupo de Trabajo visitó Comoras del 7 al 16 de mayo de 2014. El informe sobre esa visita figura como adición al presente informe. El Grupo de Trabajo da las gracias al Gobierno de Côte d'Ivoire por su respuesta positiva a la solicitud de efectuar una visita, cosa que se propone hacer del 6 al 10 de octubre de 2014.

² Se incluirán resúmenes de las comunicaciones en el informe sobre los procedimientos especiales que se presentará al Consejo de Derechos Humanos en su 27º período de sesiones.

D. Reunión de información sobre personas condenadas por actividades mercenarias

11. El Consejo de Derechos Humanos, en su resolución 21/8, pidió al Grupo de Trabajo que creara una base de datos de personas condenadas por actividades mercenarias (párr. 18). Atendiendo a esta petición, el 22 de enero de 2013 el Grupo de Trabajo transmitió a todos los Estados Miembros una nota verbal en la que se solicitaba información sobre casos de mercenarios condenados por tribunales nacionales. El 6 de marzo de 2013 se envió un recordatorio de dicha solicitud. En el anterior informe del Grupo de Trabajo al Consejo de Derechos Humanos se proporcionaba información sobre las respuestas recibidas. No se han recibido más respuestas desde entonces.

E. Otras actividades de los miembros del Grupo de Trabajo

12. El Sr. Gabor Rona participó en la Conferencia Montreux + 5, organizada por el Gobierno de Suiza, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas del 11 al 13 de diciembre 2013. Participó también en el 55º período ordinario de sesiones de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, que tuvo lugar en Luanda (Angola) del 28 de abril al 12 de mayo de 2014.

III. Investigación sobre la regulación nacional de las EMSP

A. Introducción

13. El Grupo de Trabajo prosiguió su estudio mundial de la legislación nacional relativa a las EMSP a fin de evaluar si eran eficaces para proteger los derechos humanos y promover la rendición de cuentas en caso de infracciones. El estudio apunta a indicar los elementos comunes, las buenas prácticas y las lagunas reguladoras que existan. El presente informe se refiere a 8 Estados francófonos de África y 8 Estados de Asia. El anterior informe del Grupo de Trabajo al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/24/45) se refería a 13 Estados anglófonos de África³. En su próximo informe al Consejo de Derechos Humanos, en 2015, el Grupo de Trabajo tiene la intención de analizar la legislación nacional de países del Grupo de Estados de Europa Occidental y otros Estados, el Grupo de Estados de Europa Oriental y el Grupo de Estados de América Latina y el Caribe.

14. El Grupo de Trabajo, al efectuar este estudio de la legislación nacional sobre las EMSP región por región, espera impartir orientación que sirva a los Estados Miembros para regular el fenómeno, cada vez más frecuente, de la utilización de estas empresas. Parte de la legislación examinada para el presente informe fue facilitada por Estados y otra parte se obtuvo mediante investigaciones. Las diversas legislaciones nacionales se analizaron a través del lente de los elementos siguientes: a) alcance de la legislación; b) licencia, autorización y registro de EMSP; c) selección y formación del personal de las EMSP; d) actividades de las EMSP permitidas y prohibidas; e) normas sobre la adquisición de armas por personal de las EMSP; f) uso de la fuerza y de armas de fuego por personal de las EMSP; g) rendición de cuentas por infracciones de la ley cometidas por personal de las EMSP y recursos proporcionados a las víctimas; y h) ratificación de la Convención

³ Botswana, Ghana, Gambia, Kenya, Lesotho, Mauricio, Namibia, Nigeria, Sierra Leona, Sudáfrica, Swazilandia, Uganda y Zimbabwe.

Internacional sobre los mercenarios. Se trataba de elementos que se consideraban fundamentales para comprender el marco normativo general en cada Estado.

B. África francófona

1. Análisis

15. Para el presente informe se hizo un análisis de los siguientes Estados francófonos de África: Burkina Faso, Camerún, Côte d'Ivoire, Malí, Marruecos, República Democrática del Congo, Senegal y Túnez.

16. En todos esos Estados existe legislación que regula a las empresas de seguridad privadas y sus actividades, que consisten básicamente en prestar servicios de custodia y protección para personas y bienes. En ninguno de ellos hay leyes o reglamentos que comprendan las actividades y los servicios de empresas militares privadas. Las leyes correspondientes se aplican en el ámbito interno sin prohibir la prestación de servicios militares o de seguridad en el extranjero ni referirse a la aplicabilidad extraterritorial. Sin embargo, ninguna de ellas contiene disposiciones expresas sobre la participación directa de personal de las EMSP en hostilidades. En los casos en que la legislación prohíbe al personal de esas empresas realizar ciertas actividades de policía o de las fuerzas armadas, no queda claro si las disposiciones correspondientes son aplicables únicamente en tiempos de paz o también durante conflictos armados.

17. Todos los Estados tenían reglamentos detallados acerca de la concesión de licencias y autorizaciones a las empresas de seguridad privadas, que incluían detalles acerca de las obligaciones de los diversos órganos interministeriales, ministeriales y otros órganos de gobierno. Como requisito previo para obtener una licencia, la mayor parte de los Estados analizados exigen que se estudien las "normas morales" o la "buena conducta" del personal directivo o los funcionarios de la empresa. Sin embargo, en la legislación analizada no se hacía referencia alguna a las normas de derechos humanos como requisitos previos para el funcionamiento de la empresa. En cuanto al registro en el país, únicamente el Camerún exige que la entidad encargada de conceder autorizaciones lleve un registro nacional de las empresas de seguridad⁴.

18. En general, todos los Estados tienen criterios detallados de selección e insisten en la necesidad de impartir formación al personal de las empresas de seguridad privadas. Sin embargo, la legislación se centra en cuestiones formales y de procedimiento, y no de contenido, y no se hace referencia al derecho internacional humanitario o a los derechos humanos como parte de los criterios de selección o el material de formación. Toda la legislación analizada se refiere a la cuestión de los antecedentes penales del postulante, pero varía con respecto a la gravedad de los crímenes o delitos. La mitad de ella da información acerca de la formación obligatoria y periódica del personal de las empresas de seguridad privadas, mientras que la otra mitad hace referencia únicamente a una formación facultativa y a principios basados en el código deontológico de esas empresas.

19. Con respecto a las actividades permitidas, toda la legislación en la materia recalca que las únicas actividades que están autorizadas a llevar a cabo las empresas de seguridad consisten en la prestación de servicios de custodia y protección de personas y bienes o mercancías. Además, el personal de las empresas de seguridad privadas tiene que indicar que sus actividades son de carácter privado y, en varios países, únicamente pueden llevarse a cabo dentro de propiedades privadas y no fuera de los límites de ellas. Las actividades prohibidas incluyen todos los servicios que no guarden relación con la seguridad de las personas y los bienes y en algunos países se prohíben actividades tales como la

⁴ Camerún: Decreto N° 2005/031, art. 2.

participación de personal de empresas de seguridad privadas en conflictos laborales y en actos políticos o religiosos. Algunas normas prohíben expresamente al personal de esas empresas llevar a cabo ciertas actividades que puedan superponerse con las funciones de la policía y de los militares. En la mayoría de las leyes examinadas se disuade a las empresas de seguridad privadas de contratar como directores o empleados a ex miembros de fuerzas militares o de policía.

20. Los Estados objeto del análisis tenían distintos criterios respecto de la adquisición y posesión de armas y armas de fuego; por ejemplo, algunos permitían que todo el personal de las empresas de seguridad privadas estuviera armado y tuviera en su poder armas o armas de fuego; otros únicamente autorizaban a portar armas a ciertos funcionarios de esas empresas que realizaran actividades específicas, como la vigilancia, la custodia y el transporte de fondos y lo prohibían a otros, como los encargados de la protección de personas; algunos exigían permisos especiales para adquirir y poseer armas y armas de fuego. Algunos Estados prohibían que el personal de las empresas de seguridad privada adquiriera y tuviera en su poder tipos específicos de armas y armas de fuego o prohibían la adquisición o posesión de esas armas para fines específicos. Únicamente la legislación de Túnez⁵ se refiere en particular a la adquisición ilegal de armas de fuego y a las consecuencias que ello entraña. Además, los criterios reguladores acerca del uso de la fuerza y de armas de fuego son bastante dispares; algunos Estados prohíben por completo el uso de la fuerza o de armas de fuego en toda situación, salvo para fines de legítima defensa, mientras que otros permiten el uso de la fuerza en condiciones enunciadas en la legislación en la materia.

21. En la mayor parte de los Estados parece haber un sistema de supervisión que ejerce la oficina encargada de conceder autorizaciones o licencias a las empresas de seguridad privadas y que hace inspecciones o revisiones (anunciadas o no, periódicas o *ad hoc*) o presenta informes en casos de infracciones o transgresiones de la ley cometidas por personal de esas empresas. No obstante, la legislación en la materia no tiene en general normas sobre el contenido del procedimiento de supervisión, sino que se refiere básicamente a sanciones administrativas tales como advertencias, multas, suspensión temporal de las actividades de la empresa, retiro de la autorización o confiscación de armas y armas de fuego. La legislación rara vez contempla sanciones penales o civiles. No hay disposiciones relativas al cumplimiento por el personal de los principios del derecho internacional humanitario o los principios internacionales de derechos humanos ni garantías de una reparación efectiva a las víctimas.

22. Si bien todos los Estados objeto del análisis han ratificado el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), en que se define el término "mercenario", y la mayoría de ellos son partes en la Convención de la Organización de la Unidad Africana para la eliminación de los mercenarios en África, únicamente el Camerún y el Senegal han ratificado la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios⁶.

2. Alcance de la legislación

23. La legislación de siete de los Estados analizados se refiere a la cuestión de las empresas de seguridad privadas⁷ como "empresas de seguridad privadas"⁸ o "empresas de

⁵ Túnez: Decreto N° 2002-81, art. 34.

⁶ Resolución de la Asamblea General 44/34, anexo.

⁷ En el Camerún, el Decreto N° 2005/031 no contiene detalles concretos acerca de la naturaleza de las actividades privadas de seguridad.

⁸ Las leyes de Burkina Faso, la República Democrática del Congo y Túnez.

seguridad y custodia privadas"⁹, en el sentido general de los servicios de custodia y protección prestados a personas y bienes o mercancías¹⁰. Sin embargo, ninguna de las leyes se refiere a las empresas militares privadas ni a la participación directa de personal de EMSP en hostilidades.

24. Si bien la legislación de Côte d'Ivoire, Malí y la República Democrática del Congo prohíbe que el personal de empresas de seguridad privadas lleve a cabo ciertos actos relacionados con actividades de la policía y las fuerzas armadas¹¹, no está claro si esas disposiciones son aplicables tanto en tiempos de paz como en el curso de conflictos armados. No hay legislación que regule la exportación al extranjero de servicios militares o de seguridad ni contenga cláusulas o disposiciones de jurisdicción relativas a la aplicación extraterritorial.

3. Licencias, autorización y registro de empresas de seguridad privadas

25. La legislación de Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Malí, la República Democrática del Congo y Túnez¹² dispone que el ministerio encargado de la seguridad interior concederá o registrará las autorizaciones y licencias. En otros países, el encargado de la autorización y supervisión de las actividades de las empresas de seguridad privadas es un órgano intergubernamental dependiente del ministerio de seguridad del interior o del gobierno local¹³. La legislación de Marruecos dispone que habrá "una autoridad administrativa competente" encargada de examinar las solicitudes de autorización, pero no indica qué otras obligaciones tienen ni cuál es su relación con un ministerio u otro órgano de gobierno encargado de la supervisión o vigilancia.

26. Burkina Faso exige, como requisito previo para conceder una licencia, un "estudio de los principios morales de los directivos de la empresa" mientras que, en el Senegal, la autoridad encargada de autorizar las actividades privadas de seguridad lleva a cabo una "investigación de los principios morales" de la empresa solicitante y, en Túnez, los posibles empleados de empresas de seguridad privadas deben "tener una reputación de buena conducta"¹⁴. En ninguna parte se hace referencia a las normas de derechos humanos o a la formación en la materia como requisito previo respecto de los directivos o el personal para que una empresa privada de seguridad obtenga una licencia.

27. En cuanto al registro nacional de las empresas de seguridad privadas, únicamente la legislación del Camerún exige que la autoridad competente lo lleve¹⁵. Marruecos tiene un

⁹ Las leyes de Burkina Faso, el Camerún, Côte d'Ivoire, Malí, Marruecos y el Senegal.

¹⁰ Burkina Faso: Ley N° 032/2003, art. 23, y Decreto N° 2009-343, art. 2; Côte d'Ivoire: Decreto N° 2005-73, art. 2, párr. 1; República Democrática del Congo: Decreto ministerial N° 98/008, art. 1; Marruecos: Ley N° 27-06, art. 1; Senegal: Decreto N° 2003-447; y Túnez: Decreto N° 2002-81, art. 1 a).

¹¹ Côte d'Ivoire: Decreto N° 2005-73, art. 8, y Decreto N° 743/2008, art. 6, párr. 2; Malí: Decreto N° 96-020, art. 12, y República Democrática del Congo, art. 6, párr. 2 y Decreto ministerial N° 98/008, art. 7, relativo a actos tales como mantenimiento del orden público, patrullas, aprehensiones y detenciones y porte o uso de armas de fuego.

¹² Burkina Faso: Ley N° 032/033, art. 24, y Decreto N° 343/2009, art. 20; Côte d'Ivoire: Decreto N° 2005-73, arts. 4, 14, 34 y 36, y Decreto N° 150/2007, art. 4; Malí: Decreto N° 96-064, arts. 2 y 6; República Democrática del Congo: Decreto N° 31/1965, art. 2; Túnez: Decreto N° 2003-1090, arts. 1 y 2 y Decreto N° 2002-81, art. 4.

¹³ En el Camerún, una comisión supervisada por el Ministerio de Gobierno Local examina las solicitudes de autorización; en el Senegal, la autorización es sometida a una comisión consultiva cuya composición se determina por decreto del Ministro del Interior.

¹⁴ Burkina Faso: Decreto N° 343/2009, arts. 16 y 20; Senegal: Decreto N° 2003-447, art. 3; y Túnez: Decreto N° 2002-81, art. 6.

¹⁵ Camerún: Decreto N° 2005/031, art. 2.

sistema de autoregistro por el cual las empresas de seguridad privadas deben crear y mantener un registro interno de la identidad de sus empleados y otros datos necesarios para supervisar sus actividades¹⁶ y la legislación de Túnez contiene una disposición similar, que obliga a la empresa autorizada a llevar un registro en el Ministerio del Interior¹⁷. En la legislación de los demás países no se hace referencia alguna a sistemas nacionales o de autoregistro.

4. Selección y formación del personal de las empresas de seguridad privadas

28. Los criterios para la selección del personal de las empresas de seguridad privadas indican que la falta de antecedentes penales constituye una prioridad elevada en los Estados objeto del análisis¹⁸. Por ejemplo, en Burkina Faso no puede ocupar el cargo de director o gerente de una empresa de seguridad quien haya sido "condenado a una pena de presidio de tres meses o a una pena de libertad condicional de más de seis meses por un delito o falta, salvo en el caso de cuasidelitos de negligencia o delitos involuntarios"¹⁹. Se encuentra el mismo requisito, en diverso grado, en la legislación de Côte d'Ivoire, Malí, el Senegal y Túnez²⁰.

29. El criterio de los "buenos principios morales" también es importante en varios Estados²¹. En Marruecos, la ley pertinente señala que no se puede contratar a quien haya sido "condenado o recluso por un delito que se considere incompatible con el ejercicio de las actividades descritas en la presente Ley..."²². La legislación de Marruecos es en realidad bastante progresista e indica que "la contratación de un empleado debe ajustarse a los antecedentes profesionales establecidos por los reglamentos en relación con la índole del puesto"²³. Esta ley, sin embargo, no da más detalles acerca de lo que entrañaría concretamente ese requisito. No se encuentra en la legislación analizada referencia alguna a las normas o los principios del derecho internacional humanitario o del derecho internacional de los derechos humanos que se han de tener en cuenta en el proceso de selección²⁴.

30. Únicamente en la legislación de cuatro países, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Marruecos y Túnez, se proporciona información acerca de la formación obligatoria y periódica del personal de las EMSP. Sin embargo, no hay detalles acerca del contenido de la formación exigida ni detalles concretos acerca de las normas o los principios del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de derechos humanos.

¹⁶ Marruecos: Ley N° 27-06, art. 11.

¹⁷ Túnez: Decreto N° 2002-81, art. 18.

¹⁸ Véase, por ejemplo, Burkina Faso: Decreto N° 343/2009, arts. 9 y 10; Côte d'Ivoire: Decreto N° 2005-73, art. 13; Malí: Decreto N° 96-020, art. 13 y Decreto N° 96-064, art. 3; Marruecos: Ley N° 27-06, arts. 2 y 5; Senegal: Decreto N° 2003-447, arts. 2 y 4; y Túnez: Decreto N° 2002-81, arts. 6 y 11.

¹⁹ Burkina Faso: Decreto N° 343/2009, art. 9.

²⁰ Côte d'Ivoire: Decreto N° 2005-73, art. 13; Malí: Decreto N° 96-020, art. 13; Senegal: Ley N° 27-06, art. 2; y Túnez: Decreto N° 2002-81, arts. 6 y 11.

²¹ Burkina Faso: Decreto N° 343/2009, art. 9; Côte d'Ivoire: Decreto N° 2005-73, art. 13; Malí: Decreto N° 96-020, art. 13; Senegal: Decreto N° 2003-447, art. 9.

²² Marruecos: Ley N° 27-06, arts. 2 y 5.

²³ *Ibid.*, art. 5, párr. 3.

²⁴ A pesar que la contratación está enumerada entre las funciones de la comisión encargada de autorizar las actividades privadas de seguridad en el Camerún (Decreto N° 2005/031, art. 1), la ley no menciona criterios específicos de contratación o selección.

5. Actividades permitidas y prohibidas

31. En la legislación analizada, las actividades que pueden llevar a cabo las empresas de seguridad privadas van desde servicios de custodia y protección para personas y bienes o mercancías hasta la protección para el transporte de fondos, dinero, documentos, joyas, metales preciosos u otros objetos importantes²⁵. En Burkina Faso, Côte d'Ivoire y Marruecos, las empresas de seguridad privadas tienen que indicar el carácter privado de su labor a fin de evitar confusiones entre las actividades de particulares y las de servicios públicos de seguridad²⁶. Algunos países²⁷ permiten al personal de las empresas de seguridad privadas llevar a cabo actividades dentro de los edificios y los límites de las propiedades que se protegen²⁸. Existen excepciones, como en Burkina Faso, en que la ley dispone que ese personal únicamente llevará a cabo sus funciones en el ámbito público en casos excepcionales (sin especificar más), y en Malí, Marruecos y Túnez, en que, a título excepcional, el personal de empresas de seguridad privadas puede llevar a cabo sus funciones en el ámbito público a fin de impedir hurtos, robos u otros atentados contra la propiedad²⁹.

32. En cuanto a las actividades prohibidas, la legislación de Burkina Faso, Côte d'Ivoire y Marruecos pone de relieve concretamente que los servicios no relacionados con la seguridad o protección de personas o bienes están excluidos de su ámbito y, por lo tanto, están prohibidos³⁰. La participación de personal de empresas de seguridad privadas en un conflicto laboral o acto conexo³¹ está prohibida en Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Marruecos y el Senegal. Otras actividades prohibidas incluyen la reunión de información sobre opiniones políticas, religiosas o sindicales³².

33. Algunas disposiciones prohíben expresamente que las empresas de seguridad privadas lleven a cabo ciertas actividades que se superpongan a las funciones de la policía y los militares y esas empresas tienen que respetar la legislación vigente con respecto a la aprehensión y detención de delincuentes. En la República Democrática del Congo, las empresas de seguridad privadas están autorizadas para proteger a las personas y los bienes "en la medida en que no reemplacen a la policía", pero se prohíbe que "hagan patrullas o detenciones y porten o usen armas de fuego, dispositivos especiales u otro material normalmente reservado a las fuerzas militares y de policía"³³. Se encuentran disposiciones similares en la legislación de Túnez y Marruecos³⁴.

²⁵ Côte d'Ivoire, Malí, Marruecos y Túnez.

²⁶ Véase, por ejemplo, Burkina Faso: Decreto N° 2009-343, art. 5; Côte d'Ivoire: Decreto N° 2005-73, art. 5 y Decreto N° 743/2008, art. 2; Malí: Decreto N° 96-020, art. 8; y Marruecos: Ley N° 27-06, art. 9, párr. 2.

²⁷ Burkina Faso, Marruecos y Túnez.

²⁸ Véase, por ejemplo, Burkina Faso: Decreto N° 2009-343, arts. 6 y 7; Malí: Decreto N° 96-020, art. 11; Marruecos: Ley N° 27-06, art. 17; Túnez: Decreto N° 2002-81, art. 16.

²⁹ Burkina Faso: Decreto N° 2009-343, art. 6; Malí: Decreto N° 96-020, art. 11; Marruecos: Ley N° 27-06, art. 17; y Túnez: Decreto N° 2002-81, art. 16.

³⁰ Burkina Faso: Decreto N° 2009-343, art. 4; Côte d'Ivoire: Decreto N° 2005-73, art. 3, y Decreto N° 743/2008, art. 5; Malí: Decreto N° 96-020, art. 5; y Marruecos: Ley N° 27-06, art. 8.

³¹ Véase Burkina Faso: Decreto N° 2009-343, art. 8; Côte d'Ivoire: Decreto N° 2005-73, art. 8; Malí: Decreto N° 96-020, art. 9; Marruecos: Ley N° 27-06, art. 14; y Senegal: Decreto N° 2003-447, art. 7.

³² Burkina Faso: Decreto N° 2009-343, art. 8; Côte d'Ivoire: Decreto N° 2005-73, art. 8; Malí: Decreto N° 96-020, art. 9; y Marruecos: Ley N° 27-06, art. 14.

³³ República Democrática del Congo: Decreto ministerial N° 98/008, arts. 1 y 6.

³⁴ Túnez: Decreto N° 2002-81, art. 15; y Marruecos: Ley N° 27-06, art. 16.

6. Normas relativas a la adquisición de armas por personal de empresas de seguridad privadas

34. Al parecer, los Estados objeto del análisis³⁵, tienen distintos criterios respecto de la adquisición de armas por el personal de empresas de seguridad privadas, el cual en Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Marruecos y Túnez está autorizado para portar armas y poseerlas, con inclusión de armas de fuego, según indiquen las "leyes y reglamentos pertinentes en vigor"³⁶. En Malí, el personal de las empresas de seguridad privadas encargado de vigilar, custodiar y transportar fondos puede poseer armas de fuego; sin embargo, los funcionarios encargados de la protección personal no pueden estar armados³⁷. En algunos casos se necesitan permisos especiales para la adquisición y posesión de armas y armas de fuego, como en la República Democrática del Congo y en Túnez³⁸. Sin embargo, algunos Estados prohíben que el personal de las empresas de seguridad privadas adquiera o posea tipos específicos de armas o armas de fuego o que posean armas para fines específicos. En el Camerún, por ejemplo, "el equipo de protección y alarma no puede incluir armas de fuego" y "las empresas de seguridad no pueden tener ni usar armamentos convencionales"³⁹. En Côte d'Ivoire se autoriza al personal de las empresas de seguridad privadas "a usar bombas de concusión, porras, armas con cartuchos de goma, gas pimienta y gases lacrimógenos"⁴⁰. En Malí está prohibido portar gases para legítima defensa, cuchillos y armas contundentes⁴¹, mientras que la República Democrática del Congo prohíbe portar y usar armas de fuego, dispositivos especiales y otro material normalmente reservado a las fuerzas militares y de policía⁴².

35. La legislación analizada contiene también disposiciones expresas acerca de las obligaciones del personal de empresas de seguridad privadas con respecto a las armas que obren en su poder en caso de suspensión temporal o cesación de las actividades. En el Camerún, por ejemplo, en el caso de que se retire la autorización "el órgano administrativo competente confiscará automáticamente las armas de filo en poder de la empresa de seguridad"; en caso de cesación temporal de las actividades, "el equipo de protección que tenga la empresa de seguridad se depositará ante las autoridades competentes para su custodia". Tras la cesación temporal de las actividades por más de seis meses, ese equipo podrá ser vendido o ser objeto de otro acto de disposición sin contraprestación⁴³. La legislación de Túnez contiene disposiciones similares en virtud de las cuales, en caso de cesación definitiva de las actividades, la empresa de seguridad y su personal deben entregar todas las armas a las autoridades competentes⁴⁴.

36. De los ocho Estados objeto del análisis, únicamente en Túnez está penada la posesión ilegal de armas. Si el agente autorizado para portar un arma a los efectos del desempeño de una misión como parte de sus funciones no devuelve de inmediato el arma tras completar esa misión, "será sancionado con una pena de presidio de un año y una multa de 1.000 dinares"⁴⁵.

³⁵ La legislación del Senegal que se pudo consultar no hacía posible analizar este criterio.

³⁶ Burkina Faso: Decreto N° 2009-343, art. 37; Côte d'Ivoire: Decreto N° 2005-73, art. 23; Marruecos: Ley N° 27-06, art. 13; y Túnez: Decreto N° 2002-81, art. 21.

³⁷ Malí: Decreto N° 96-020, art. 15.

³⁸ República Democrática del Congo: Decreto N° 31/1965, art. 5; y Túnez: Decreto N° 2002-81, art. 21.

³⁹ Camerún: Decreto N° 2005/031, art. 23.

⁴⁰ Côte d'Ivoire: Decreto N° 2005-73 art. 31.

⁴¹ Malí: Decreto N° 2011-0599, art. 5.

⁴² Côte d'Ivoire: Decreto N° 2005-73, art. 31; Malí: Decreto N° 2011-0599, art. 5; y República Democrática del Congo: Decreto ministerial N° 98/008, art. 6.

⁴³ Camerún: Decreto N° 2005/031, arts. 31 y 32.

⁴⁴ Túnez: Decreto N° 2002-81, arts. 21 a 25.

⁴⁵ *Ibid.*, art. 34.

37. La legislación analizada indica que los Estados regulan de manera poco uniforme la adquisición y posesión de armas por empresas de seguridad privadas. A los efectos de cerciorarse de que el personal de esas empresas respete las normas internacionales relativas a los procedimientos de licencias de control de armamentos, transferencia, adquisición y tráfico de armamentos, y pueda hacerse valer su responsabilidad por los delitos correspondientes, es fundamental que los Estados establezcan métodos uniformes para la adquisición, exportación, importación y posesión de armas por ellas y su personal.

7. Uso de la fuerza y de armas de fuego por el personal de empresas de seguridad privadas

38. Únicamente Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Marruecos y la República Democrática del Congo tienen legislación específica sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego por personal de empresas de seguridad privadas. En ella se dispone expresamente que el uso de armas de fuego únicamente está autorizado durante una actividad de seguridad en casos de legítima defensa⁴⁶. Marruecos tiene un criterio distinto en el sentido de que la ley aplicable permite que el personal de empresas de seguridad privadas porte armas y use, entre otras cosas, todos los medios de defensa y control de conformidad con las disposiciones aplicables que figuren en las leyes y los reglamentos pertinentes⁴⁷. En Côte d'Ivoire, el uso de armas de fuego y granadas en la custodia y el transporte de fondos está autorizado en las condiciones indicadas por el Ministro de Seguridad Interior y los reglamentos relativos al porte de armas de fuego. En todo caso, el permiso para portar armas de fuego debe indicar el uso que se pretende hacer de ellas. Además, en circunstancia alguna se podrá usar un permiso para portar armas de fuego en actividades distintas de la custodia o el transporte de fondos, so pena de sanciones por el porte de armas de fuego ilícitas⁴⁸. La legislación de Malí dispone que el personal de empresas de seguridad privadas encargado de la vigilancia, la custodia y el transporte de fondos podrá poseer y usar armas y municiones únicamente durante el tiempo necesario para cumplir su cometido en el ámbito privado⁴⁹. Además, el uso de esas armas da lugar a la responsabilidad de la empresa y está comprendido en las disposiciones del Código Penal⁵⁰.

39. La legislación de Côte d'Ivoire prohíbe que las empresas de seguridad privadas participen en actividades policiales administrativas o de investigación, así como que participen en operaciones encaminadas a mantener el orden público durante actos políticos, deportivos, sociales, tradicionales, culturales o religiosos⁵¹. En la República Democrática del Congo, las empresas de seguridad privadas pueden encargarse de la protección de personas y bienes "en la medida en que no reemplacen a la policía", pero está prohibido que realicen patrullas, hagan aprehensiones o porten y usen armas de fuego, dispositivos especiales y cualquier otro material normalmente reservado a las fuerzas militares y de policía⁵². En Malí, las empresas de seguridad privadas encargadas de la vigilancia, la custodia y el transporte de fondos o la protección de personas no pueden participar en operaciones que apunten a mantener el orden público ni limitar la libre circulación de personas o vehículos⁵³. En la legislación analizada no se hace referencia al uso de la fuerza o de armas de fuego que pueda superponerse a las funciones de la policía o los militares o

⁴⁶ Véase, por ejemplo, Burkina Faso: Decreto N° 2009-343, art. 38; y Côte d'Ivoire: Decreto N° 148/2007, arts. 1 y 2.

⁴⁷ Marruecos: Ley N° 27-06, art. 13.

⁴⁸ Côte d'Ivoire: Decreto N° 2005-73, art. 30.

⁴⁹ Malí: Decreto N° 96-064, arts. 12 y 13.

⁵⁰ Malí: Decreto N° 96-020, art. 18.

⁵¹ Côte d'Ivoire: Decreto N° 2005-73, art. 8; y Decreto N° 2008/743, art. 6.

⁵² República Democrática del Congo: Decreto Ministerial N° 98/008, arts. 1, 6 y 7.

⁵³ Malí: Decreto N° 96-020, art. 12.

pueda entrañar la participación directa de personal de empresas de seguridad privadas en hostilidades en el curso de conflictos armados.

8. Responsabilidad por las infracciones de la ley cometidas por personal de empresas de seguridad privadas y recursos para las víctimas

40. Seis de los Estados objeto del análisis tienen sistemas de supervisión previstos en su legislación respectiva⁵⁴ y que son por lo general administrados por el organismo que concede autorizaciones o licencias a las empresas de seguridad privadas. La supervisión de las actividades de esas empresas incluye la realización de inspecciones (anunciadas o no y periódicas o *ad hoc*).

41. Únicamente la legislación del Camerún da detalles acerca del alcance de las actividades de supervisión e inspección del órgano competente e indica que la inspección comprenderá al personal, las condiciones generales de contratación, los casos de remoción del cargo, el cumplimiento de los requisitos relativos a los uniformes e insignias, la validez del seguro y si los tipos y la cantidad del equipo de comunicaciones, protección y alarma empleados son adecuados⁵⁵. Con arreglo a las leyes que regulan sus actividades, las empresas de seguridad privadas de Côte d'Ivoire están obligadas a presentar informes trimestrales y anuales sobre sus actividades a los órganos que las supervisan o autorizan⁵⁶; sin embargo, no están obligadas a hacerlo con respecto al grado de cumplimiento de otras leyes. La verificación del cumplimiento de las normas del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario no forma parte de las funciones de los órganos de supervisión.

42. Côte d'Ivoire, la República Democrática del Congo y el Senegal son los únicos Estados en que las empresas de seguridad privadas están obligadas a comunicar de inmediato las infracciones o transgresiones de la ley que haya cometido su personal. En Côte d'Ivoire, el personal de esas empresas debe informar de inmediato a las fuerzas nacionales de defensa y seguridad de "cualquier infracción o acto relativo a la seguridad de las personas y los bienes o la seguridad del Estado" que obre en su conocimiento y proporcionar cualquier información que permita aprehender a los autores. Sin embargo, esta disposición tiene una importante restricción en el sentido de que "en circunstancia alguna se proporcionará esa información a una Potencia extranjera o a una persona física o jurídica que no forme parte de las fuerzas de defensa y seguridad del país"⁵⁷. La legislación de la República Democrática del Congo exige que las empresas de seguridad privadas comuniquen sin dilación "cualquier incidente grave a la autoridad administrativa" y "entreguen a quien haya sido aprehendido en su zona de operaciones"⁵⁸. En el Senegal, toda infracción de la legislación aplicable será notificada al comité establecido por el Ministro del Interior⁵⁹. En ninguna de esas normas se dan más detalles acerca de la índole de las "infracciones" o los "actos relativos a la seguridad de las personas y los bienes o la seguridad del Estado" ni los "incidentes graves" que deben comunicarse, lo que hace difícil llevarlas a la práctica.

43. En cuanto a la responsabilidad del personal de las empresas de seguridad privadas, la mayor parte de la legislación analizada se refiere a actos que infringen las disposiciones

⁵⁴ La legislación de la República Democrática del Congo que se pudo consultar no incluye referencias expresas a la supervisión ni a inspecciones.

⁵⁵ Camerún: Decreto N° 2005/031, art. 25.

⁵⁶ Côte d'Ivoire: Decreto N° 2005-73, art. 38; y Decreto N° 743/2008, art. 19.

⁵⁷ Côte d'Ivoire: Decreto N° 743/2008, art. 20.

⁵⁸ República Democrática del Congo: Decreto N° 31/1965, art. 8.

⁵⁹ Senegal: Decreto N° 2003-447, art. 16.

relativas a las actividades autorizadas, las licencias, la autorización, la contratación y otros procesos administrativos⁶⁰.

44. Con respecto a las sanciones, los diversos decretos se refieren a las sanciones administrativas aplicadas por los organismos que conceden autorizaciones o licencias, y que consisten en una advertencia, una multa, la suspensión temporal de las actividades de la empresa, el retiro de la autorización y la confiscación de armas y armas de fuego⁶¹. En Malí, Marruecos y Túnez, las sanciones incluyen penas de presidio⁶². En algunos casos, se hace referencia a sanciones penales o civiles por infracciones vinculadas con la realización de las actividades de las empresas de seguridad privadas⁶³; sin embargo, en la legislación analizada no se encuentran disposiciones relativas a los recursos para las víctimas.

C. Asia

45. Se analizó la legislación de los siguientes Estados de Asia: China, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Malasia, Pakistán, Singapore y Sri Lanka.

1. Análisis

46. Los ocho Estados objeto del análisis tienen reglamentos relativos a las empresas de seguridad privadas, si bien no hay uniformidad. Ninguno de ellos comprende las empresas o servicios militares privados. A pesar de la índole transnacional de los servicios privados de seguridad, casi todas las leyes se refieren a los servicios de las empresas de seguridad privadas en el ámbito nacional, con excepción de la India que se refiere brevemente a la importación y exportación de esos servicios⁶⁴. En la mayoría de los Estados, la regulación de esas empresas está a cargo de una autoridad del gobierno central o local. Las facultades de las autoridades reguladoras difieren en cada Estado. El requisito de obtener una licencia es obligatorio en todos ellos.

47. Los criterios para conceder licencias a empresas de seguridad privadas o a sus empleados varían en los distintos Estados. En todos ellos, los empleados de esas empresas no deben tener antecedentes penales y deben haber recibido cierta formación. En la mayor parte de la legislación no se especifican los requisitos en cuanto a la formación y en ninguna se hace referencia a una formación que incluya las normas o la legislación en materia de derechos humanos. Tampoco se especifica si la obligación de revelar una condena penal en el pasado incluyen también actos que vulneren los derechos humanos. En cuanto a un registro central de las empresas de seguridad privadas, únicamente en tres Estados hay normas en ese sentido. Si bien toda la legislación analizada exige que las empresas de seguridad privadas obtengan una licencia, únicamente cuatro Estados exigen

⁶⁰ Véase, por ejemplo, Burkina Faso: Decreto N° 2009-343, art. 47; Côte d'Ivoire: Decreto N° 2005-73, arts. 51 a 53; Malí: Decreto N° 96-020, arts. 19 a 24; Marruecos: Ley N° 27-06, arts. 22 a 27; y Senegal: Decreto N° 2003-447, art. 16.

⁶¹ Véase, por ejemplo, Burkina Faso: Decreto N° 2009-343, arts. 47 a 50; Camerún: Decreto N° 2005/031, arts. 30 a 32; Côte d'Ivoire: Decreto N° 2005-73, arts. 50 a 53; Malí: Decreto N° 96-020, arts. 19 a 23; Marruecos: Ley N° 27-06, arts. 22 a 28; Senegal: Decreto N° 2003-447, art. 16; y Túnez: Decreto N° 2002-81, arts. 29 a 34.

⁶² Malí: Decreto N° 96-020, art. 24; Marruecos: Ley N° 27-06, arts. 22 a 28; y Túnez: Decreto N° 2002-81, arts. 29 a 34.

⁶³ Burkina Faso: Decreto N° 2009-343, art. 47; Côte d'Ivoire: Decreto N° 2005-73, arts. 51 y 53; Marruecos: Ley N° 27-06, art. 28; Malí: Decreto N° 96-020, art. 19; y Túnez: Decreto N° 2002-81, arts. 30-34.

⁶⁴ Véase la India, Ley de Regulación de las Entidades de Seguridad Privadas, 2005 (Ley N° 29, 2005), art. 4. Están prohibidas las actividades extraterritoriales sin autorización previa y las empresas extranjeras no pueden prestar servicios de seguridad a menos que cumplan ciertos requisitos.

que cada uno de los funcionarios o empleados de seguridad sea titular de una. El requisito de que el personal de esas empresas obtenga una licencia puede constituir un importante mecanismo para emplear a personas cualificadas y excluir a quienes hayan sido condenados en el pasado por abusos de los derechos humanos.

48. A pesar de las deficiencias y de la falta de uniformidad en la legislación analizada, se observaron algunas buenas prácticas. Así, las empresas extranjeras no pueden actuar como empresas de seguridad privadas sin cumplir ciertos requisitos fijados por la ley⁶⁵; esas empresas están obligadas a cooperar con las autoridades de defensa civil en situaciones de emergencia, como un desastre natural⁶⁶; están obligadas a tener una sólida estructura de organización con un sistema de responsabilidad jerárquica y un sistema de gestión de los guardias de seguridad⁶⁷; las personas jurídicas y las empresas de seguridad privadas tienen responsabilidad civil y penal⁶⁸; se revoca la licencia en caso de participación en una actividad delictiva⁶⁹; las empresas de seguridad privadas no pueden efectuar investigaciones penales⁷⁰; no pueden ejercer ninguna de las facultades conferidas a los agentes de seguridad pública⁷¹ y están obligadas a mantener un registro interno de datos⁷². Estas prácticas constituyen el marco necesario para contribuir a la supervisión de infracciones de los derechos humanos.

49. Ninguno de los ocho Estados analizados es parte en la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.

2. Alcance de la legislación

50. En los Estados objeto del análisis, las leyes y los reglamentos que rigen a las empresas de seguridad privadas se refieren a esas empresas o a los servicios privados de seguridad⁷³; ninguna se refiere a los servicios militares. Existen distintos criterios para regular las empresas de seguridad privadas no solo entre los Estados objeto del análisis sino también dentro de un determinado Estado. Por ejemplo, en el Pakistán no hay una ley federal que rijan las empresas de seguridad privadas⁷⁴; esas empresas se establecen con arreglo a la Ordenanza de 1984 sobre las Compañías⁷⁵ y cada estado o provincia tiene sus

⁶⁵ China y, hasta cierto punto, la India.

⁶⁶ Filipinas.

⁶⁷ China.

⁶⁸ India, Malasia, Pakistán (provincia de Sindh) y Sri Lanka.

⁶⁹ Emiratos Árabes Unidos, Filipinas e India.

⁷⁰ Emiratos Árabes Unidos y Malasia.

⁷¹ Malasia, Pakistán (provincias de Sindh y Punjab).

⁷² Emiratos Árabes Unidos, India y Sri Lanka.

⁷³ Véase China: Decreto del Consejo de Estado N° 564, Reglamento sobre la administración de los servicios de seguridad y custodia, 2009 (Decreto N° 564 del Consejo de Estado, 2009); Emiratos Árabes Unidos: Decreto federal N° 37, 2006, relativo a las empresas de seguridad privadas (Decreto N° 37, 2006); Filipinas: Ley sobre las Entidades de Seguridad Privadas, 1969 (Ley de la República N° 5487, 1969), enmendada por el Decreto presidencial N° 11, 1972 y, posteriormente, por los Decretos presidenciales N° 100, 1973, y N° 1919, 1984. Se está debatiendo en el Parlamento nacional un proyecto de ley sobre las empresas militares y de seguridad privadas; India: Ley de Reglamentación de las Entidades de Seguridad Privadas, 2005 (Ley N° 29, 2005); Malasia: Ley de las Entidades Privadas de 1971, que incorpora todas las modificaciones hasta el 1 de enero de 2006 (Ley N° 27, 1971); Singapur: Ley sobre la Industria de la Seguridad Privada, 2007 (Ley N° 38, 2007); Sri Lanka: Ley sobre la Reglamentación de las Entidades de Seguridad Privadas, 1998 (Ley N° 45, 1998).

⁷⁴ El Pakistán es una federación que consta de cuatro provincias (Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa y Balochistán), Islamabad, la capital, y zonas tribales de administración federal en el noroeste, que incluyen las regiones de frontera.

⁷⁵ Pakistán, Ordenanza sobre las compañías, N° XLVII de 1984.

propios reglamentos. De esta manera, las empresas de seguridad privadas en el Pakistán se rigen por ordenanzas provinciales. A los efectos del presente estudio se seleccionaron las ordenanzas de dos provincias: la Ordenanza de Reglamentación y Control de los Órganos Privados de Seguridad de Sindh, 2000 (Ordenanza de Sindh de 2000), provincia de Sindh (Karachi)⁷⁶ y la Ordenanza de Reglamentación y Control de las Empresas de seguridad privadas de Punjab⁷⁷, 2002 (Ordenanza de Punjab de 2002), provincia de Punjab.

51. Si bien la mayoría de las leyes regula los servicios efectivos de seguridad y custodia, las de China comprenden también las entidades de adiestramiento de guardias de seguridad⁷⁸; la legislación de la India proporciona información sobre los servicios de empresas de seguridad privadas y dispone que los guardias y supervisores de esas empresas deben recibir formación⁷⁹; la legislación de Malasia proporciona información sobre los servicios de las empresas de seguridad privadas⁸⁰; la Ordenanza de Punjab (Pakistán) comprende servicios tales como guardias de seguridad para personas, bienes y dinero en tránsito. La legislación de Filipinas abarca a los guardias de seguridad y detectives privados, mientras que la de Singapur define a los investigadores privados, los funcionarios de seguridad y la prestación de servicios de seguridad, incluida la de servicios de alarma, y la de Sri Lanka comprende la prestación de servicios para la protección de funcionarios del sector público y de bienes de propiedad del Estado. La legislación de China dispone también que el sector público puede contratar directamente los servicios de empresas de seguridad privadas. A excepción de China y Sri Lanka, ningún otro Estado hace referencia directa a la contratación de empresas de seguridad privadas por el sector público y se prohíbe expresamente que organizaciones del sector público utilicen a esas empresas.

52. Toda la legislación se refiere a la prestación de servicios privados de seguridad en el ámbito interno; sin embargo, la legislación de la India se refiere además a la exportación de actividades de seguridad privada, pero indica que la prestación de los servicios de esa índole en el extranjero está prohibida sin autorización de la Dirección de Supervisión que, a su vez necesita la autorización del Gobierno central. Además, la legislación de la India no permite que las empresas extranjeras se dediquen a servicios de seguridad privada en su jurisdicción o los proporcionen, a menos que estén inscritas en la India o tengan un propietario, accionista mayoritario, socio o director que sea ciudadano de la India⁸¹. La legislación de China permite también la importación de actividades de empresas de seguridad privadas extranjeras y la limita prohibiendo que ciertas organizaciones con funciones públicas suscriban contratos con empresas de seguridad de propiedad íntegramente extranjera o con capital mixto (chino y extranjero)⁸².

53. Toda la legislación analizada regula al personal de las empresas de seguridad privadas y, en algunos casos, la regulación tiene un alcance bastante amplio. Por ejemplo, la legislación de China no solo regula las empresas de seguridad sino también a las organizaciones que las utilizan, entre ellas órganos de gobiernos, organizaciones sociales e instituciones públicas, aunque los guardias de seguridad deben cumplir los requisitos prescritos por la ley y no pueden prestar servicios fuera de los recintos para cuya custodia han sido contratados o más allá de los límites de la propiedad administrada por la entidad que los contrata.

⁷⁶ La Ordenanza entró en vigor de inmediato pero fue publicada el 3 de enero de 2001 como Ordenanza N° II de Sindh, de 2001.

⁷⁷ Pakistán, Ordenanza N° LXIX de Punjab, de 2002.

⁷⁸ China: Decreto N° 564 del Consejo de Estado, 2009, cap. VI.

⁷⁹ India: Ley N° 29 de 2005, art. 9 2).

⁸⁰ Malasia: Ley N° 27 de 1971, art. 2.

⁸¹ India: Ley N° 29 de 2005, arts. 4 y 6 2).

⁸² China: Decreto N° 564 del Consejo de Estado, 2009, art. 22.

54. El artículo 1 del Decreto de los Emiratos Árabes Unidos sobre las empresas de seguridad privadas incluye en la definición de estas a "cualquier órgano de gobierno" así como a cualquier "empresa o institución de seguridad... que ofrezca un servicio de seguridad, independiente o junto con otras actividades". Parece tratarse de la única norma que prevé la posibilidad de que un órgano de gobierno preste un servicio de seguridad que se considere "privado".

3. Licencia, autorización y registro de las empresas de seguridad privadas

55. En toda la legislación analizada se hace referencia a una autoridad central, normalmente un departamento o ministerio de gobierno, con atribuciones para autorizar, supervisar y fiscalizar a las empresas de seguridad privadas⁸³. La autoridad puede estar descentralizada, como en el caso de Estados federales como el Pakistán, la India y China y, en general, las leyes conceden a la autoridad central la facultad de, entre otras, poner en práctica los reglamentos de ejecución y conceder, renovar, cancelar o suspender licencias. En algunos casos, la autoridad tiene la facultad expresa de ejercer un grado máximo de fiscalización de las empresas de seguridad privadas⁸⁴.

56. En todos los Estados analizados, la empresa privada de seguridad debe tener una licencia para comenzar o continuar sus funciones. Quien establece la empresa debe tener también una licencia. Únicamente cuatro países⁸⁵ exigen que el personal de la empresa tenga también una licencia separada.

57. En la mayor parte de la legislación analizada hay algunos criterios comunes para otorgar una licencia a la empresa o al propietario, entre ellos la necesidad de que el solicitante cumpla ciertos requisitos en cuanto a las cualificaciones y la formación⁸⁶; el requisito de no haber sido condenado por crimen o delito⁸⁷ y el requisito de buena conducta⁸⁸. Otros criterios enunciados en dos o más Estados incluyen la nacionalidad del director o de la empresa⁸⁹; el requisito de que las empresas tengan un capital mínimo⁹⁰; requisitos relativos a la edad del director⁹¹ y a los locales, el equipo y las instalaciones, entre otras cosas⁹². Los criterios para que el personal de seguridad obtenga licencias son los mismos en los cuatro Estados que la exigen e incluyen la formación y experiencia

⁸³ En China, el Departamento de Seguridad Pública del Consejo de Estado; en los Emiratos Árabes Unidos, el ministerio competente o la policía; en Filipinas, el Jefe de Policía; en la India, la autoridad de control es delegada por el gobierno de cada Estado; en Malasia, el Ministro de Seguridad Interior; en el Pakistán (Sindh y Punjab), el Gobierno designa al órgano encargado de conceder las licencias; en Singapur, el Ministro de Seguridad Interior; en Sri Lanka, el ministro competente.

⁸⁴ Así ocurre en China, los Emiratos Árabes Unidos, la India, Malasia, el Pakistán (Sindh y Punjab) y Sri Lanka.

⁸⁵ China, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas y Singapur.

⁸⁶ Filipinas: Ley de la República N° 5487 de 1969, art. 4; Singapur: Ley N° 38, 2007, art. 21 4); Sri Lanka: Ley N° 45, 1998, art. 4 3) y China: Decreto N° 564 del Consejo de Estado, 2009, arts. 8 2) y 3).

⁸⁷ Filipinas: Ley de la República N° 5487 de 1969, art. 4; Sri Lanka: Ley N° 45, 1998, art. 4 3); China: Decreto N° 564 del Consejo de Estado, 2009, art. 8 2); India: Ley N° 29, 2005, arts. 5 y 6 1) y Pakistán: Ordenanza de Punjab de 2002 (art. 6. c)).

⁸⁸ Filipinas: Ley de la República N° 5487 de 1969, art. 4 f); Singapur: Ley N° 38, 2007, art. 21 (sobre la renovación); y Sri Lanka: Ley N° 45, 1998, art. 4 3).

⁸⁹ Filipinas: Ley de la República N° 5487 de 1969, art. 4; e India: Ley N° 29, 2005, art. 6 2).

⁹⁰ Filipinas: Ley de la República N° 5487 de 1969, art. 4; China: Decreto N° 564 del Consejo de Estado, 2009, art. 8.

⁹¹ Filipinas: Ley de la República N° 5487 de 1969, art. 4.

⁹² China: Decreto N° 564 del Consejo de Estado, 2009, art. 84; y Emiratos Árabes Unidos: Decreto N° 37, 2006, art. 6.

necesarias⁹³; no haber sido condenado por crímenes o delitos⁹⁴ y el cumplimiento de los criterios relativos a la buena conducta moral⁹⁵. De los Estados objeto del análisis, China es el que regula en forma más minuciosa los criterios relativos a los guardias de seguridad y exige, entre otras cosas, que aprueben los exámenes en la materia; que los contratos incluyan la cobertura en el programa nacional de seguridad social, que reciban formación periódica sobre la ley, conocimientos profesionales y competencia técnica y que se haga una evaluación periódica del desempeño de las funciones.

58. Únicamente en algunas de las leyes y ordenanzas examinadas se hace referencia al establecimiento de un registro de órganos de seguridad: Pakistán, 2000, Ordenanza de Sindh⁹⁶; Filipinas, Ley N° 5487 de la República, 1969⁹⁷ y Sri Lanka, Ley N° 45, 1998⁹⁸; en las demás no se prevé expresamente ese registro.

59. No se indica la necesidad de que el personal de las empresas de seguridad privadas, con inclusión de sus directores y propietarios, tenga formación específica en las normas o los principios de derechos humanos o conocimiento de ellas.

4. Formación y selección del personal de las empresas de seguridad privadas

60. En la legislación analizada falta uniformidad con respecto a la formación y selección del personal de las empresas de seguridad privadas. Ninguna hace referencia a la formación en las normas y principios de derechos humanos y se indica en cambio diversos tipos de formación, incluso la impartida por instituciones públicas tales como la policía⁹⁹ o la expedición de cartas de aprobación por autoridades de gobierno tales como el Jefe de Policía¹⁰⁰. En las leyes de Filipinas, el Pakistán (provincias de Sindh y Punjab) y Singapur se hace referencia detallada a los criterios de selección. En cuanto a la conducta de los empleados, en algunos de los Estados analizados¹⁰¹, esta se rige también indirectamente por los criterios establecidos para la concesión de licencias a cada uno de ellos. Cuando no es necesario que los empleados tengan licencias, los criterios de selección se aplican a las propias empresas. El Decreto N° 564 del Consejo de Estado de China es más detallado a este respecto, pues contiene una larga lista de medidas que deben tomar los guardias de seguridad al prestar servicios de custodia y seguridad. Algunas de las leyes en la materia establecen claras limitaciones a la conducta de los agentes de seguridad como, por ejemplo, la prohibición de que lleven a cabo actividades o ejerzan facultades normalmente confiadas a agentes de policía, funcionarios de aduanas, funcionarios de inmigración, funcionarios de establecimientos carcelarios u otro tipo de funcionario público¹⁰².

⁹³ Filipinas: Ley de la República N° 5487 de 1969, art. 5; Singapur: Ley N° 38, 2007, art. 21 4); China: Decreto N° 564 del Consejo de Estado, 2009, art. 16.

⁹⁴ Filipinas: Ley de la República N° 5487 de 1969, art. 5; China: Decreto N° 564 del Consejo de Estado, 2009, art. 17; y Singapur: Ley N° 38, 2007, art. 21 8).

⁹⁵ Singapur: Ley N° 38, 2007, arts. 21 y 21 6); China: Decreto N° 564 del Consejo de Estado, 2009, art. 16.

⁹⁶ Véase el art. 6 6).

⁹⁷ Véase el art. 8: "...el Jefe de Policía de Filipinas o su representante debidamente autorizado emitirán un permiso para la concesión de la licencia y la registrarán en su oficina...". Figura una lista detallada de seis circunstancias y de los derechos correspondientes en pesos o de los impuestos aplicables.

⁹⁸ Véase el art. 6: el registro estará a cargo de la autoridad competente.

⁹⁹ Filipinas: Ley N° 5487 de la República, 1969, art. 6.

¹⁰⁰ Malasia: Ley N° 27, 1971, art. 9.

¹⁰¹ China, Filipinas y Singapur.

¹⁰² Malasia: Ley N° 27, 1971; Pakistán: Ordenanza de Sindh de 2000 y Ordenanza de Punjab de 2002.

5. Actividades permitidas y actividades prohibidas

61. Cada uno de los Estados analizados regula de distinta manera la conducta de las empresas de seguridad privadas desde el punto de vista de las actividades que están permitidas o las que están prohibidas. En todo caso, la legislación de dos o más Estados regula cuatro aspectos, a saber, el requisito de que las empresas de seguridad privadas exhiban públicamente su licencia en un lugar conspicuo¹⁰³; el requisito de mantener un registro interno de datos¹⁰⁴; la prohibición de llevar a cabo investigaciones penales¹⁰⁵; y la prohibición de ejercer facultades que estén normalmente conferidas a agentes de seguridad pública. A ese respecto, la legislación de Malasia y del Pakistán, por ejemplo, dispone que las empresas de seguridad privadas no podrán ejercer las facultades conferidas a los agentes de policía, funcionarios de aduanas, funcionarios de inmigración, funcionarios carcelarios o cualquier otro tipo de funcionario público¹⁰⁶. Dejando de lado los cuatro aspectos mencionados, las actividades de las empresas de seguridad privadas que están permitidas o prohibidas varían según el país y no existen disposiciones relativas a la aplicación de normas o principios de derechos humanos.

6. Normas relativas al uso de la fuerza y la adquisición de armas por personal de las empresas de seguridad privadas

62. La mayor parte de los Estados objeto del análisis permiten que el personal de las empresas de seguridad privadas porte armas de fuego. La legislación de Singapur prohíbe que los guardias privados porten ciertas armas de fuego a menos que tengan un permiso especial; en Sri Lanka rige un requisito similar. La legislación de Malasia no menciona el uso de armas de fuego por personal de una empresa de seguridad privada, pero indica que se puede emitir una licencia para portar armas a una persona responsable, designada por ella. Un detalle común que suele faltar en las normas es el del tipo de armas de fuego y otras armas no letales que pueden usar los guardias de seguridad. Los reglamentos de China¹⁰⁷ sobre el uso de revólveres por guardias y escoltas constituyen un buen ejemplo de legislación que limita el uso de armas de fuego y define las circunstancias en que se pueden usar. La legislación analizada difiere también en cuanto a la forma en que regula la formación que debe tener el personal de las empresas de seguridad privadas a fin de obtener una licencia para portar armas de fuego. A este respecto no existen normas claras o uniformes. Los requisitos en materia de formación en algunos Estados¹⁰⁸ no especifican normas mínimas; el personal de las empresas de seguridad privadas en Filipinas puede portar armas con sujeción a la norma de que los guardias de seguridad deben recibir formación y se establecen limitaciones en cuanto al tipo de armas que se pueden portar. La legislación de Sri Lanka indica en términos vagos que el Ministro puede establecer reglamentos acerca del grado de competencia en el uso de armas de fuego por personal de empresas de seguridad privadas y los departamentos de policía local emiten los certificados necesarios para el uso de esas armas.

¹⁰³ Emiratos Árabes Unidos: Decreto N° 37, 2006, art. 12; Filipinas: Ley de la República N° 5487 de 1969, art. 10; India: Ley N° 29 de 2005, art. 12; Malasia: Ley N° 27 de 1971, art. 6; Pakistán: Ordenanza de Punjab de 2002, art. 9; y Sri Lanka: Ley N° 45 de 1998, art. 5 4).

¹⁰⁴ Emiratos Árabes Unidos: Decreto N° 37 de 2006, art. 19; India: Ley N° 29 de 2005, art. 15; y Sri Lanka: Ley N° 45 de 1998, art. 7 2).

¹⁰⁵ Emiratos Árabes Unidos: Decreto N° 37 de 2006, art. 12; y Malasia: Ley N° 27 de 1971, art. 6.

¹⁰⁶ Malasia: Ley N° 27 de 1971, art. 19 2 i); Pakistán: Ordenanza de Sindh de 2000, art. 15.2 (adicional) y Ordenanza de Punjab, 2002, art. 20.

¹⁰⁷ China: Reglamento sobre la administración del uso de revólveres por guardias y escoltas de dedicación exclusiva, 2002.

¹⁰⁸ Pakistán (Punjab) y Singapur.

63. La legislación en la materia rara vez hace referencia a la adquisición ilegal de armas. La legislación de los Emiratos Árabes Unidos menciona que está prohibido adquirir o portar armas de fuego, pero en la mayoría de los demás países no se hace referencia a armas de ningún tipo. En todo caso, ello puede obedecer al hecho de que hay leyes específicas que regulan la venta y posesión de armas de fuego y no significa que las empresas de seguridad privadas tengan impunidad a este respecto.

7. Responsabilidad por infracciones de la ley cometidas por el personal de empresas de seguridad privadas y recursos para las víctimas

64. Únicamente dos Estados, China¹⁰⁹ y Malasia¹¹⁰, reconocen claramente la obligación de presentar información relativa a cualquier delito o infracción de sus leyes. La legislación de Sri Lanka establece la obligación de presentar informes a la autoridad competente y cabe interpretar que ello incluye informes sobre delitos o infracciones¹¹¹. Sin embargo, en la legislación analizada por lo general no se encuentran disposiciones expresas por las cuales haya que comunicar delitos o infracciones contra los derechos humanos, lo que plantea importantes cuestiones acerca de los efectos de las actividades de las empresas de seguridad privadas en cuanto a los derechos humanos y a la cuestión de la rendición de cuentas.

65. Una buena práctica que se observó en China consiste en la obligación del empleador o de la empresa de seguridad de proporcionar una reparación en caso de que un guardia de seguridad cause lesiones o la muerte¹¹². La legislación de Filipinas dispone también lo que se considera una buena práctica: las empresas de seguridad deben adquirir una caución emitida por una compañía de seguros de buena reputación a fin de cubrir cualquier demanda judicial válida interpuesta contra ellas¹¹³. La Ordenanza de Punjab de 2002 dispone también que la empresa de seguridad debe contratar un seguro para sus guardias¹¹⁴. La falta de disposiciones similares en la legislación de otros Estados puede tener consecuencias en cuanto al derecho a resarcimiento de las víctimas de abusos de los derechos humanos.

66. En cambio, dos de las legislaciones analizadas contienen disposiciones que conceden inmunidad a las autoridades centrales¹¹⁵ o a cualquier persona¹¹⁶ siempre que hayan actuado de buena fe. La Ley de 2005 de la India exime de responsabilidad a la autoridad encargada del control por los actos que haya realizado de buena fe, mientras que la Ordenanza de Sindh de 2000 (Pakistán) exime de responsabilidad a cualquier persona por los actos que haya realizado de buena fe.

¹⁰⁹ Véase China, Decreto N° 564 del Consejo de Estado, 2009, art. 29, que señala que el guardia de seguridad pondrá término de manera oportuna a cualquier infracción o delito que tenga lugar en la zona en que presta servicios. Indica además que debe comunicar prontamente a la policía cualquier infracción o delito que no haya podido impedir y, al mismo tiempo, tomar medidas para proteger el escenario del delito.

¹¹⁰ Malasia: Ley N° 27 de 1971, art. 6.

¹¹¹ Sri Lanka: Ley N° 45 de 1998, art. 7 2).

¹¹² Véase China, Decreto N° 564 del Consejo de Estado, 2009, art. 46: "Cuando un guardia de seguridad cause la muerte de una persona o lesiones a personas o daños a la propiedad de otros al prestar servicios de seguridad y custodia, su empleador pagará una indemnización y podrá recurrir, de conformidad con la ley, contra el guardia de seguridad que haya actuado con premeditación o negligencia grave".

¹¹³ Filipinas: Ley de la República N° 5487 de 1969, art. 8, párr. 2.

¹¹⁴ Véase el artículo 13 6).

¹¹⁵ India: Ley N° 29 de 2005, art. 23.

¹¹⁶ Pakistán: Ordenanza de Sindh de 2000, art. 13.

IV. Conclusión y recomendaciones

67. El estudio de la legislación sobre las empresas militares o de seguridad privadas de los países del África francófona y de Asia pone de manifiesto los distintos criterios adoptados respecto de la privatización de la seguridad. El análisis de la legislación en ambas regiones indican que se presta especial atención a los servicios de protección y custodia de personas y bienes en el ámbito interno. No hay legislación que se refiera a las empresas militares privadas ni se refiera suficientemente a la cuestión de los servicios militares y de seguridad prestados en el extranjero ni a la aplicabilidad extraterritorial de las normas en la materia.

68. El carácter transnacional de los servicios privados de seguridad y militares, la alta probabilidad de que el personal de esos servicios haga uso de la fuerza o se vea involucrado en hostilidades y las lagunas en la reglamentación, así como la falta de coherencia en los criterios que se constataron en el presente estudio subrayan el riesgo de que la situación actual pueda redundar en grave desmedro del principio de legalidad y del funcionamiento efectivo de las instituciones democráticas del Estado encargadas de la seguridad pública. Además, las carencias en cuanto a la regulación y la responsabilidad que se han observado pueden poner en peligro derechos humanos fundamentales como el derecho a la seguridad y el derecho a la vida, así como al derecho de las víctimas a recursos eficaces. El Grupo de Trabajo subraya que el derecho a la seguridad es un derecho humano inalienable para todos, en el cual se sustenta el goce de otros derechos.

69. El estudio de las leyes y los reglamentos pone de manifiesto que no existen normas concretas acerca del contenido de las inspecciones de las actividades de supervisión de las EMSP, así como que no se hace referencia al cumplimiento por esas empresas o su personal de las normas y principios del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, así como que no hay disposiciones relativas a la responsabilidad penal y civil de individuos y empresas ni recursos eficaces para las víctimas.

70. Si se toman en consideración las diversas actividades y el amplio ámbito geográfico de los servicios de las EMSP, la falta de reglamentación en estos aspectos críticos puede tener como resultado que no haya un control efectivo del Estado sobre la industria de la seguridad privada y las actividades de su personal. La falta de familiaridad del personal de las EMSP con las normas de derechos humanos suscita también preocupación. A fin de que las normas y principios del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos se respeten y apliquen efectivamente en el curso de las operaciones privadas de seguridad, con miras a minimizar del riesgo de infracciones a ellos y de garantizar la responsabilidad efectiva de las empresas de seguridad privadas y su personal, es indispensable instituir mecanismos de investigación de antecedentes con respecto a los derechos humanos, así como una formación obligatoria con respecto a las normas y principios pertinentes del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Esa formación en las normas de derechos humanos es imperativa y debe ser parte de los criterios obligatorios generales para obtener una licencia y renovarla posteriormente.

71. El estudio indica que, si bien en varias legislaciones nacionales se dispone el establecimiento de una autoridad pública encargada de conceder licencias a las empresas de seguridad privadas, muy pocos de los Estados analizados exigen que esa autoridad lleve un registro centralizado de licencias concedidas o la facultan para ello. La obligación de los Estados de llevar un registro de esa índole puede servir para

mantener la supervisión de las actividades de esas empresas y la conducta de su personal.

72. El Grupo de Trabajo espera que el estudio de la legislación nacional sobre las EMSP le permita constatar buenas prácticas que le ayuden a impartir orientación a los Estados Miembros acerca de la forma de regular efectivamente a las empresas de seguridad privadas y asegurar el disfrute por todos del derecho a la seguridad. Por ejemplo, la regulación de la exportación de servicios de la seguridad (y militares) es un ejemplo de buena práctica, que los Estados deberían tener en cuenta en sus marcos reguladores. Otras buenas prácticas incluyen el requisito obligatorio de que las EMSP tengan una sólida estructura de organización y un sistema eficaz de responsabilidad jerárquica que comprenda no solo sus actividades sino también la conducta de su personal, así como el requisito de que todos los presuntos delitos o infracciones cometidos por las EMSP o su personal sean comunicados a la policía o a otras fuerzas del orden.

73. No obstante las buenas prácticas que constate el Grupo de Trabajo en el curso de su estudio de la legislación nacional sobre las empresas de seguridad privadas y a pesar de las detalladas disposiciones sobre las actividades que están permitidas o prohibidas, sigue habiendo lagunas en la reglamentación relativa a cuestiones tales como la adquisición y el tráfico de armas por personal de las EMSP y sus consecuencias, así como distintos criterios con respecto al uso de la fuerza y de armas de fuego en el ejercicio de las funciones. Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades de las EMSP y la posible participación de personal de empresas de seguridad privadas en enfrentamientos o en actividades relacionadas con mercenarios, así como la probabilidad de que ese personal porte y use armas, la falta de regulación plantea posibles peligros para los derechos humanos. Una convención internacional podría establecer normas y métodos uniformes sobre la adquisición, exportación, importación, posesión y utilización de armas y serviría también para hacer valer la responsabilidad del personal de las EMSP en todo el mundo por la adquisición o el tráfico ilícitos de armas o el uso de la fuerza cuando esté prohibido.

74. El estudio pone de manifiesto la falta de reglamentaciones claras acerca de la supervisión por las autoridades y de la responsabilidad de quienes participan en la industria de las EMSP. En particular, no se encuentran disposiciones en la legislación acerca de la forma de regular la conducta de los servicios privados de seguridad o militares en posibles casos de disturbios o conflicto armado. Una convención internacional que comprenda cuestiones tales como la concesión de licencias, la autorización, la selección y la formación del personal de las EMSP promovería la aplicación en el plano nacional de normas comunes y uniformes que asegurarían una rendición de cuentas efectiva y la existencia de recursos en caso de transgresiones.

75. El Grupo de Trabajo reitera su opinión de que un instrumento internacional de regulación que sea exhaustivo y tenga fuerza jurídica obligatoria constituye la mejor forma de proteger debidamente los derechos humanos. A este respecto, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la labor del grupo de trabajo intergubernamental creado por el Consejo de Derechos Humanos a fin de examinar la posibilidad de un instrumento internacional de regulación de las EMSP y alienta a todos los Estados a que participen activamente en ese proceso.